



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Edison Alberto Gil Hernández
Demandado	Teresa Jaramillo Toro
Radicado	05001 31 03 012 2022 00190 03
Procedencia	Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Asunto	Auto No. 020
Decisión	Revoca
Tema	Requisitos petición prueba testimonial
	<p>..si bien la procedencia del decreto de este medio probatorio está sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 212 del Código General del Proceso, y como se dijo en el auto recurrido, con enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, siendo esta última de vital importancia, pues permite enterar a las partes respecto del asunto al cual va dirigido el testimonio, lo cierto es que la Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Así lo sostuvo en la Sentencia C-029 de 1995, precisamente cuando declaró exequible el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, antes citado:</p> <p><i>“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.”</i></p>

**TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**  
**2023-015**

**SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN**

**Medellín, dieciocho (18) de abril de dos mil veintitrés (2023)**

Decide el Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de Teresa Jaramillo Toro en contra del auto del 6 de diciembre de 2022, proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, dentro del proceso ejecutivo que en su contra instauró Edison Alberto Gil Hernández, mediante el cual se negó la solicitud de prueba testimonial por no cumplir los requisitos del artículo 212 del C. General de Proceso.

**I. ANTECEDENTES**

1. Ante el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, se presentó demanda ejecutiva de Edison Alberto Gil Hernández en contra de Teresa Jaramillo Toro, en el que, habiéndose propuesto excepciones de mérito, inicialmente el *a quo* consideró que las pruebas solicitadas eran impertinentes e inútiles por lo que proferiría sentencia anticipada, decisión que fue revocada. el Tribunal por auto del 16 de noviembre pasado indicando que las manifestaciones *relativas a* los fundamentos fácticos en que se basaban aquél medio de defensa hacían evidente la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba testimonial.

2. En providencia del 6 de diciembre último, no sólo se fijó la fecha para realizar audiencia inicial y de instrucción y

juzgamiento, sino que se negó el decretó de la prueba testimonial, pues consideró ahora la *a quo* que no se había enunció concretamente cuál era el objeto de la prueba testimonial, es decir no se reunía la exigencia prevista en el artículo 212 del C. General del Proceso (Archivo 27).

4. Inconforme con la decisión, el mandatario judicial de la parte accionada interpuso recurso de reposición y de manera subsidiaria apelación, manifestando que no se pueden desconocer las pruebas solicitadas dentro de la contestación de la demanda –sic-, pruebas que el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, ordenó decretar por considerarlas útiles y pertinentes para la defensa, pues, se asegura que el dinero nunca fue recibido, y con los testimonios solicitados y el interrogatorio de parte pretende demostrar, en audiencia las excepciones de mérito propuestas. (Archivo 28)

5. La funcionaria de instancia se mantuvo en su postura y concedió el recurso de apelación interpuesto de manera subsidiaria. (Archivo 30)

## II. CONSIDERACIONES

1. El ordenamiento jurídico da especial importancia al derecho de probar, reconociendo a las partes de un proceso, el de *“presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra”* (inc. 4º, artículo 29 Constitución Política) e imponiéndoles la carga (*onus probandi*) de acreditar los supuestos fácticos de las normas jurídicas invocadas para deducir el bien controvertido (artículos 1757 Código Civil y 167 del C. General del Proceso.

2. De otro lado, la prueba testimonial es un medio probatorio que reviste una especial connotación en el curso de un proceso, en la medida en que es la prueba por excelencia para acreditar conductas humanas y acontecimientos de la sociedad y de la naturaleza. Se especifica por ser indirecta porque el funcionario judicial, quien se encarga de recepcionarla y valorarla, no entra en contacto directo con los hechos, toda vez que se entera de ellos a través de la exposición de unos acontecimientos narrados por el testigo; es personal, pues es el deponente el autor de su declaración, e histórica; en la medida que reconstruye hechos pasados, es decir, a través de esos hechos se construye un relato de acontecimientos que reproducen lo sucedido.

Ahora, si bien la procedencia del decreto de este medio probatorio está sujeta al cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 212 del Código General del Proceso, y como se dijo en el auto recurrido, con enunciar concretamente los hechos objeto de la prueba, siendo esta última de vital importancia, pues permite enterar a las partes respecto del asunto al cual va dirigido el testimonio, lo cierto es que la Corte Constitucional ha señalado que, por disposición del artículo 228 Superior, las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad de los derechos subjetivos y no fines en sí mismas. Así lo sostuvo en la Sentencia C-029 de 1995, precisamente cuando declaró exequible el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, antes citado:

*“Cuando el artículo 228 de la Constitución establece que en las actuaciones de la Administración de Justicia “prevalecerá el derecho sustancial”, está reconociendo que el fin de la actividad jurisdiccional, y*

*del proceso, es la realización de los derechos consagrados en abstracto por el derecho objetivo, y, por consiguiente, la solución de los conflictos de intereses. Es evidente que en relación con la realización de los derechos y la solución de los conflictos, el derecho procesal, y específicamente el proceso, es un medio.”*

3. Luego, con fundamento en el derecho de acceso a la administración de justicia y en el principio de la prevalencia del derecho sustancial, dicha Corporación ha sostenido que en una providencia judicial puede configurarse en “*exceso ritual manifiesto*” cuando hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en la aplicación de las normas procesales.

Es así como en la sentencia T-1306 de 2001 se precisó:

*“[L]os jueces deben ser conscientes de la trascendental importancia que tiene el derecho procesal en cuanto a medio garantizador de los derechos materiales dentro del marco de un debido proceso. En consecuencia, el actuar general debe ser guiado por la coexistencia de estas manifestaciones normativas permitiendo que en un marco jurídico preestablecido se solucionen los conflictos de índole material.*

*“Sin embargo, si el derecho procesal se torna en obstáculo para la efectiva realización de un derecho sustancial reconocido expresamente por el juez, mal haría éste en darle prevalencia a las formas haciendo nugatorio un derecho del cual es titular quien acude a la administración de justicia y desnaturalizando a su vez las normas procesales cuya clara finalidad es ser medio para la efectiva realización del derecho material (art. 228)”.*

4. Los anteriores prolegómenos de orden jurisprudencial, para reiterar que en la providencia del 16 de noviembre pasado el Tribunal precisó:

*“4. En lo que atañe a la negativa del despacho de decretar la prueba testimonial solicitada por la parte demandada, para la Sala es claro que*

dicha prueba no determina el mérito ejecutivo del pagaré que sirve como base del recaudo ejecutivo, toda vez que como bien lo dijo el recurrente el mismo cumple los requisitos del artículo 422 del C. General del Proceso.

***“Lo que sucede es que la narración que se hace de los hechos fundantes las excepciones de mérito propuestas, en especial las de inexistencia de la obligación que contiene el título objeto de recaudo, dinero no entregado, temeridad de la acción ejecutiva, en las que, no solo se afirma que nunca la demandada recibió en préstamo dinero del ejecutante, del que además se asevera fue su abogado de confianza, asesorándola en varios asuntos jurídicos; la ausencia de causa para solicitar y recibir la suma de dinero que se contra –sic-, por tener propiedades, ser pensionada en los Estados Unidos de Norteamérica, aunado a la avanzada edad de la excepcionante, lo que se dice, hace necesario la coadyuvancia de apoyos o cuidadores, son todas manifestaciones que hacen evidente la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba testimonial, a lo que se suma la posibilidad de interrogar al actor en la fase pertinente de la audiencia prevista en el artículo 372 del C. General del Proceso”.***

5. Recapitulando, fácil concluir que los testigos habrán de declarar sobre los hechos que soportan las excepciones de mérito, teniendo la parte actora el derecho y la oportunidad de contrainterrogarlos, a lo que se suma que el artículo 221 del código del rito vigente señala que el juez informará sucintamente al testigo acerca de los hechos objeto de su declaración y le ordenará que haga un relato de cuanto conozca o le conste sobre los mismos, interrogándolo para precisar el conocimiento que sobre ellos tenga y obtener el informe espontáneo sobre ellos.

### III. DECISION

**Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA el el auto del 6 de**

diciembre pasado, proferido por el Juzgado Doce Civil del Circuito de Oralidad de esta ciudad, y en su lugar se dispone que señale fecha y hora para la recepción de la prueba testimonial de que da cuenta la foliatura.

**NOTIFIQUESE**

**JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO**  
**Magistrado**

Firmado Por:  
Juan Carlos Sosa Londono  
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional  
Sala 001 Civil  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **cb0056d08929fc2fd22b28ebf1e53ecd31917747a552410f5dab5954c763da4a**  
Documento generado en 19/04/2023 01:25:42 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**